

JERÓNIMO DELGADO CAICEDO
JULIANA ANDREA GUZMÁN CÁRDENAS

CAPÍTULO I I

*Reconocimiento de la República Árabe Saharaui
Democrática: entre la legalidad internacional
y los cálculos geopolíticos*

RESUMEN

África es el escenario de una de las anomalías geopolíticas más importantes del mundo: mientras el resto de territorios coloniales en el continente lograron su independencia, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) aún continúa bajo ocupación extranjera. El Sahara Occidental no solo es la última colonia de África, sino también hace parte del listado de los conflictos olvidados, de esos con los que el mundo se acostumbró a vivir. Este es, sin duda, uno de los conflictos contemporáneos que mejor ejemplifica la problemática entre la actuación estatal con base en el derecho internacional y las decisiones que se toman a partir de cálculos geoestratégicos. Este capítulo demuestra que el estancamiento del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, así como la incapacidad de alcanzar la autodeterminación por parte de la población saharauí, responde a la contradicción que existe entre la legalidad internacional y los intereses geopolíticos de diversos Estados. Por otro lado, argumenta que el reconocimiento internacional de la RASD surge como una alternativa viable de solución en cuanto podría superar desafíos actuales como la incapacidad de realizar un referendo de autodeterminación, la acción desprestigiada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los intereses de potencias extranjeras como Francia y Estados Unidos. Actualmente, el sistema internacional se debate entre el respeto a las normas de derecho internacional, su modificación o actuar según las consideraciones de los Estados más poderosos. La respuesta a este debate determinará si derechos que en teoría ya no son reconocidos a nivel mundial, como el de la conquista, continuarán dominando las relaciones internacionales.

Palabras clave: Sahara Occidental, reconocimiento, Sur Global, RASD, conflicto.

INTRODUCCIÓN

La existencia del muro construido por Marruecos para dividir en dos el territorio del Sahara Occidental evidencia una de las anomalías geopolíticas más importantes de África: mientras el resto de territorios coloniales en el continente lograron su independencia, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) aún continúa bajo ocupación extranjera. Los fracasos recurrentes en los intentos de acuerdo entre el Frente Polisario —representante legítimo del pueblo saharauí— y Marruecos, así como el escaso interés por parte de la comunidad internacional, han contribuido a la prolongación del conflicto por

más de cuatro décadas. El Sahara Occidental no solo es la última colonia de África (Simanowitz, 2009), sino también hace parte del listado de los conflictos olvidados (Zoubir, 2007, 2010), esos que ya no aparecen en televisión y con los que el mundo se acostumbró a vivir. Para Zoubir (2010), este conflicto atrae atención esporádica por los intereses de diferentes actores dentro y fuera de la región, no por los derechos de los saharauis.

Las soluciones que se han propuesto hasta ahora han intentado satisfacer intereses tanto de Marruecos como del Frente Polisario. Entre estas alternativas se encuentran el referéndum de independencia, el otorgamiento de algún nivel de autonomía al pueblo saharauí dentro de Marruecos y la presión internacional para que termine la ocupación marroquí del territorio. Para Zunes (2015), varias de estas soluciones están enmarcadas en una “tercera vía” que busca llegar a un punto medio entre los intereses de las partes, una fórmula que podría ser exitosa, en términos generales, en la resolución de conflictos. Sin embargo, afirma que en el caso del Sahara Occidental esto no es viable dado que la lucha que está librando el pueblo saharauí por su autodeterminación, en el marco del derecho internacional, no debe satisfacer los intereses de un país ocupante (Zunes, 2015).

Teniendo en cuenta que en los últimos cuarenta años no se ha encontrado una solución al conflicto, es importante cuestionarse qué herramientas dentro del derecho internacional pueden ser utilizadas para solucionarlo. Con base en lo anterior, este capítulo busca encontrar respuesta a la pregunta: ¿en qué medida puede el reconocimiento internacional de la RASD desestancar el conflicto saharauí? A partir de lo anterior surgen otras preguntas secundarias que incluyen: ¿qué es el reconocimiento internacional de un Estado?, ¿cuáles son las principales causas del estancamiento del conflicto en el Sahara Occidental? Y, ¿cuáles han sido las características del reconocimiento internacional a la RASD?

Este capítulo tiene como objetivo principal analizar el reconocimiento como Estado de la RASD en el marco de la legalidad internacional y los cálculos geoestratégicos en el sistema internacional. Los objetivos específicos son: 1) determinar qué es el reconocimiento internacional de un Estado, 2) explicar cuáles son las razones por las que el conflicto se encuentra estancado, y 3) analizar la trayectoria y las implicaciones del reconocimiento internacional de la RASD.

En consecuencia, la hipótesis que se pretende demostrar sugiere que el estancamiento del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, así como la incapacidad de alcanzar la autodeterminación por parte de los saharauis, responde a la contradicción que existe entre la legalidad internacional y los intereses geopolíticos de diversos Estados. Sin embargo, el reconocimiento

internacional de la RASD surge como una alternativa viable de solución en cuanto podría superar desafíos actuales como la incapacidad de realizar un referendo de autodeterminación, la acción desprestigiada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los intereses de potencias extranjeras como Francia y Estados Unidos.

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y los cuestionamientos derivados de esta, este capítulo está dividido en cuatro secciones. La primera trata el marco teórico de la investigación en relación con el reconocimiento internacional de los Estados. La segunda sección presenta un análisis de las principales variables que han generado un estancamiento del conflicto saharauí, entre las que se encuentran las estrategias por parte de Marruecos para evitar la realización del referendo, el desprestigio de la ONU y de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) y la importancia de intereses geoestratégicos de potencias como Francia y Estados Unidos.

Tomando como base lo anterior, en la tercera sección se hace un análisis de la evolución del reconocimiento internacional de la RASD por parte de otros Estados, incluyendo las razones por las que la reconocen y aquellas por las que no, y los impactos que esto ha generado. Además, se hace referencia al reconocimiento internacional de esta república como una posible alternativa para desestancar y solucionar este conflicto.

UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

En 1956, el Reino de Marruecos obtuvo su independencia de Francia e inmediatamente inició un proceso de reivindicación y recuperación del territorio del Gran Marruecos, un concepto formulado por el dirigente político Allal El Fassi (Vagni, 2014) y que hacía alusión a todos los territorios que históricamente habían sido parte del Reino. Bajo esta iniciativa, el Gobierno marroquí reclamaba una serie de zonas administradas por España, así como el territorio de Mauritania y algunas regiones del norte de Argelia y de Mali (Dasgupta, 2000; Hernández, 2011). Uno de los puntos más importantes de esta política fue la recuperación del Sahara Occidental, antigua parte integral del África Occidental española y del Sahara español desde 1884 (Nwafor, 2015).

Sin embargo, en 1963, el Sahara español fue incluido oficialmente en el listado de territorios a los que se les debía aplicar la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de la ONU (Vagni, 2014) consagrada en la Resolución 1514 de 1960 de la Asamblea General (Smith,

2005). Esta resolución establecía que en los territorios en fideicomiso, no autónomos y demás que no habían logrado su independencia para ese entonces, como el caso del Sahara español, se debían tomar las medidas necesarias “para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados” (ONU, 1960, párr. 19). De acuerdo con Nwafor (2015), la Resolución 1514 proporcionó el ímpetu político y la justificación legal para que las colonias africanas intensificaran sus luchas por la independencia.

Así, a partir de 1963, la ONU empezó a presionar a España para que accediera a descolonizar el territorio del Sahara Occidental (Vagni, 2014). A lo anterior se le sumó el hecho de que, en 1973, el Frente Polisario inició una guerra de independencia en contra de España y logró que este país iniciara negociaciones para una posible transferencia de poder y retirada del Sahara Occidental (Porges y Leuprecht, 2016; Zunes, 2015). A partir de las negociaciones entre España y el Frente Polisario se le prometió a la población saharaui que la primera realizaría un referendo a finales de 1975 con el objetivo de determinar el destino del Sahara español (Zunes, 2015).

No obstante, Marruecos y Mauritania objetaron las negociaciones que se estaban adelantando entre España y el Frente Polisario argumentando que el Sahara español históricamente era parte de su propio territorio (Porges y Leuprecht, 2016). En consecuencia, el tema fue llevado por la Asamblea General de la ONU ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 13 de diciembre de 1974 con el objetivo de obtener una opinión consultiva (Dasgupta, 2000; Joffé, 2010). El 16 de octubre de 1975, la Corte emitió su opinión a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui (Zoubir, 2007) argumentando que:

... la Corte llegó a la conclusión de que los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. (Corte Internacional de Justicia, 1975, p. 137)

Sumado a lo anterior, entre mayo y junio de 1975, una misión de la ONU visitó España, Marruecos, Argelia, Mauritania y el Sahara Occidental con el

objetivo de investigar las preferencias de la población frente a la aplicación de la Resolución 1514 de 1960 (ONU, 1975). La misión reportó que la mayoría de saharauis no apoyaba la integración con Marruecos o Mauritania, sino la independencia (Zunes, 2015).

Así, para asegurar la consolidación del Gran Marruecos, y como respuesta tanto a los resultados de la misión de exploración de la ONU como a la opinión emitida por la CIJ y a la promesa de España de realizar un referendo de autodeterminación, el 6 de noviembre de 1975, Marruecos inició la movilización y el asentamiento de cientos de miles de marroquíes en el territorio del Sahara Occidental por medio de la Marcha Verde (Porges y Leuprecht, 2016; Simanowitz, 2009). Y aunque la marcha fue presentada por el rey Hasán II como una recuperación pacífica de las provincias marroquíes del sur, dentro de las personas que se movilizaron se encontraba un número importante de soldados cuyo objetivo era comenzar a consolidar la ocupación marroquí del territorio (Nwafor, 2015; Zoubir, 2007). La CIJ y la ONU exhortaron al rey a que se retirara del territorio del Sahara Occidental, sin embargo, Marruecos hizo caso omiso y miles de saharauis tuvieron que buscar refugio en el sur de Argelia (Smith, 2005).

Ante la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, y las reclamaciones y maniobras por parte de Marruecos y Mauritania, el 14 de noviembre de 1975 España firmó con estos dos países los Acuerdos Tripartitos de Madrid mediante los cuales les transfirió la administración del Sahara Occidental (Vagni, 2014) a cambio de mantener ciertos derechos en temas de pesca y minería (Simanowitz, 2009). A pesar de lo estipulado en estos Acuerdos, la ONU nunca reconoció a Marruecos y Mauritania como potencias administradoras del Sahara Occidental y, aún hoy, el territorio es considerado legalmente como una colonia española (Zoubir, 2010).

En cumplimiento de lo estipulado en los Acuerdos, el 27 de febrero de 1976 las tropas españolas abandonaron por completo el territorio saharauí y, ese mismo día, desde el exilio en los campamentos de refugiados en Tindouf, Argelia, el Frente Polisario proclamó la creación de la RASD en todo el territorio del Sahara Occidental (Zoubir, 2007). Con la salida de España, Marruecos continuó la ocupación del territorio desde el norte mientras que Mauritania lo hizo desde el sur. Con la ocupación se dio inicio a la oposición armada del Frente Polisario destinada a liberar el territorio de la ocupación marroquí y mauritana (Simanowitz, 2009). Tres años después, en 1979, Mauritania accedió a firmar un acuerdo de paz con el Frente Polisario para retornarle los territorios invadidos en el sur del Sahara Occidental debido a la efectividad de

las acciones militares de este movimiento en contra de las tropas mauritanas y los efectos económicos de la guerra (Porges y Leuprecht, 2016). Sin embargo, ante la salida de Mauritania, Marruecos intensificó su expansionismo y ocupó los territorios al sur anteriormente controlados desde Nouakchott (Nesiah, 2003; Pinto, 2015; Zunes, 2015). De acuerdo con Porges y Leuprecht, desde la retirada de Mauritania,

... con la asistencia de muchos países, incluido Estados Unidos, Marruecos comenzó una novedosa estrategia de contrainsurgencia, construyendo una secuencia de barreras defensivas concéntricas, incluido el uso generalizado de minas terrestres, que permitió a los militares marroquíes consolidar sus logros alrededor de los principales centros urbanos [...] Esta estrategia redujo al Polisario a ataques de golpe y fuga en el muro que continuaba en expansión. A finales de la década de 1980 la guerra se encontraba esencialmente en un punto muerto¹. (Porges y Leuprecht, 2016, p. 71)

Debido al estancamiento del conflicto, la Organización para la Unidad Africana (OUA) trabajó en una propuesta de paz cuyos puntos más relevantes incluían la negociación directa entre Marruecos y el Frente Polisario, el cese al fuego, la realización de un referendo en torno a la libre determinación saharauí y el establecimiento de una fuerza de mantenimiento de paz (Hernández, 2011; Nwafor, 2015). Lo anterior fue tomado como base por la ONU y la aprobación del Consejo de Seguridad (CS) de la Resolución 690 el 19 de abril de 1991 que detalló los pasos por seguir para la realización del referendo y creó la Minurso (Zoubir, 2007). En septiembre de 1991 se logró un cese al fuego entre las partes y se dio inicio a la preparación del referendo basado en el censo poblacional que España había realizado en 1974 (Pinto, 2015; Smith, 2005).

Sin embargo, desde ese mismo año, Marruecos ha utilizado diferentes tácticas para retrasar la ejecución del referendo. Una de las más consistentes ha sido la movilización de marroquíes a los asentamientos ubicados en el territorio del Sahara Occidental para modificar la composición del censo de personas habilitadas para votar (Zunes, 2015). Otra estrategia ha sido la represión estatal en dicho territorio por medio de la ocupación y la censura de la información relacionada con el conflicto, buscando reducirlo a un asunto de descolonización o un problema fronterizo con Argelia (Porges y Leuprecht, 2016). De acuerdo

1 Traducciones al español realizadas por los autores.

con Nwafor (2015), el objetivo final de Marruecos es debilitar la determinación de los saharauis de alcanzar la independencia y otorgarles cierto nivel de autonomía dentro del Gran Marruecos.

RECONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

Teniendo en cuenta el objetivo principal de este capítulo, es necesario aclarar a qué se hace referencia cuando se utiliza el concepto de “reconocimiento” de un Estado. Para Pinto (2015), la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados y las costumbres internacionales estipula cuáles son las condiciones para que un Estado sea considerado como tal. Según la Convención, un Estado es entendido como un sujeto de derecho internacional que tiene población permanente, territorio determinado, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados (OEA, 1933). Ahora, aunque esta convención debería obligar únicamente a los Estados de América ya que fue firmada en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha sido reconocida como derecho internacional consuetudinario (Castellino, 2000), es decir, “una obligación internacional que surge de prácticas estatales establecidas” (Shaw, 2003, p. 70) o “una práctica general y consistente de los Estados que se cumple por un sentido de obligación legal” (p. 71).

Ahora bien, de acuerdo con González (1992), el reconocimiento de un Estado tiene dos fases: la primera relacionada con el autorreconocimiento y la segunda con el reconocimiento otorgado por parte de otros Estados. Una de las olas más importantes respecto al primer caso tuvo lugar en la ex-Unión Soviética y la antigua Yugoslavia. Allí, “comunidades humanas, unidas internamente por factores históricos, geográficos y culturales, reivindican su derecho a construir un Estado que los represente ante sí mismas, pero también ante la sociedad internacional de la que desean formar parte sustancial” (p. 27). Lo anterior está enmarcado en el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho que tienen los pueblos de decidir, entre otras cosas, sus propias formas de gobierno y de estructurarse libremente sin ningún tipo de injerencia exterior (Medina, 2017). Este derecho está respaldado por resoluciones de la ONU como la 1514 y la 2625, así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

La segunda fase, según González, está relacionada con el derecho que tienen otros Estados para “otorgar una especie de patente para que el reconocido

pueda ser considerado un verdadero sujeto del derecho internacional” (1992, p. 28). Esta fase del reconocimiento está contenida en la Convención de Montevideo la cual, en su artículo 6, establece que “el reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el derecho internacional” (OEA, 1933, p. 4).

Rojas (2010) profundiza en el tema y aclara que, además de la existencia de un Estado, otras situaciones jurídicas que pueden ser sujeto de reconocimiento son los gobiernos, los gobiernos de facto, los movimientos beligerantes y los comités de liberación nacionales. También indica que el reconocimiento puede ser expreso o tácito, asunto que es abordado por el artículo 7 de la Convención de Montevideo en el que se afirma que el reconocimiento tácito “resulta de todo acto que implique la intención de reconocer al nuevo Estado” (OEA, 1933, p. 4). Rojas (2010) ejemplifica lo anterior al mencionar que el reconocimiento tácito de un Estado se da por medio del establecimiento de relaciones diplomáticas. Además de lo anterior, es importante indicar que según el artículo 6 de la Convención de Montevideo, el reconocimiento de un Estado es incondicional e irrevocable (OEA, 1933).

Según Worster (2010), en derecho internacional existen dos teorías predominantes respecto al reconocimiento del Estado: la constitutiva y la declarativa. La primera establece que el reconocimiento no es un proceso automático y que un Estado únicamente puede ser considerado como tal cuando otros lo reconocen (Tudoroiu, 2017; Worster, 2010); esta teoría está relacionada con el tema tratado en los párrafos anteriores. Por otro lado, la teoría declarativa sostiene que los Estados tienen poca o ninguna discreción para determinar si una entidad constituye un Estado, por lo que el reconocimiento es casi irrelevante y lo importante son los hechos y no la discreción estatal (Worster, 2010). De hecho, esta teoría se basa en la Convención de Montevideo, específicamente en el artículo 3 que indica que:

... la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aún antes de reconocido el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al derecho internacional. (OEA, 1933, p. 3)

Para Newman y Visoka (2018), el tema del reconocimiento de los Estados es uno de los aspectos menos claros en las relaciones internacionales argumentando que, en la práctica, este proceso responde sobre todo a intereses políticos y no necesariamente a la doctrina legal. A su vez, Worster (2010) indica que, si bien la teoría declarativa es la correcta en términos políticos, existe un error al no tener en cuenta la interrelación entre ambas aproximaciones. En su trabajo de 2010 afirma que “la teoría declarativa se concentra en la situación objetiva interna y la teoría constitutiva se concentra en los derechos y deberes legales externos. Ambas [aproximaciones] pierden una parte del análisis” (párr. 16).

La práctica contemporánea de reconocimiento no tiene en cuenta únicamente los elementos clásicos que definen un Estado (población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad para relacionarse con otros), en cuanto se ha convertido en un proceso altamente político en el que tienen relevancia consideraciones legales, normativas y geopolíticas (Newman y Visoka, 2018). El aspecto geopolítico en el reconocimiento de otros Estados se ha visto evidenciado en casos como el reconocimiento por parte de Estados Unidos y otros países occidentales del Estado de Kosovo en febrero de 2008, y por parte de Rusia de Osetia del Sur y Abjasia en agosto del mismo año (Fabry, 2012). Otro ejemplo es el proporcionado en el capítulo 9 de este libro, “Palestina e Israel en la política exterior colombiana”, en el que se indica que los impedimentos para el reconocimiento del Estado palestino responden, entre otras razones, a intereses geopolíticos por parte de países como Estados Unidos. Para Newman y Visoka este tipo de potencias “a menudo toman posiciones opuestas en los conflictos de reconocimiento, lo que resulta en una serie de nuevos Estados que gozan de una membresía parcial en la sociedad internacional. Así, el reconocimiento internacional parece ser cada vez más político que basado en la ley” (Newman y Visoka, 2018, p. 3).

Además de la politización del reconocimiento de los Estados, también ha existido un cambio respecto a los actores que pueden otorgarlo. Según la Convención de Montevideo y una parte de la doctrina internacional, esta es una prerrogativa exclusivamente de los Estados (Worster, 2009). Sin embargo, otros actores como las organizaciones regionales e internacionales han comenzado a tener un papel significativo en este proceso (Newman y Visoka, 2018). Específicamente, en el caso de las organizaciones regionales, como la Unión Africana, para Newman y Visoka (2018) el reconocimiento estatal desde una perspectiva regional tiene en cuenta dinámicas regionales específicas y permite la coexistencia de agendas geopolíticas y normativas, así como de intereses estatales divergentes.

Ahora bien, existen tres corrientes respecto a la relación entre el reconocimiento de un Estado y el conflicto. Por un lado, las teorías morales de reconocimiento argumentan que este debe estar relacionado con “esfuerzos para transmitir respeto y estima hacia la identidad colectiva de otros Estados que en última instancia darían como resultado no menos que civilizar las relaciones internacionales” (Bartelson, 2013, p. 118). Por otro lado, autores como Geis, Fehl, Daase y Kolliarakis (2015) afirman que el reconocimiento no siempre lleva a la solución de un conflicto y que puede conllevar consecuencias indeseadas como nuevas formas de exclusión dentro de la jerarquía de poder. Por último, para académicos como Agné (2013), el reconocimiento político de otros Estados ha generado una tendencia de escalamiento de los conflictos y es una de las principales causas de los conflictos internacionales actuales. Tudoroiu concluye el asunto y afirma que “este tema es de hecho demasiado complejo para ser reducido a una simple ecuación reconocimiento = paz” (2017, p. 199).

El siguiente apartado retomará varios aspectos mencionados en los párrafos anteriores para responder la pregunta de investigación. En primera medida, se tendrán en cuenta aspectos tanto de la teoría constitutiva como la declarativa, dado que un Estado puede ser considerado como tal en cuanto cuente con legitimidad y soberanía tanto en aspectos internos como externos (Fabry, 2012; Tudoroiu, 2017). Por otro lado, aunque este trabajo reconoce que no existe una ecuación directa entre el reconocimiento estatal y la solución de un conflicto, sí toma en consideración aproximaciones como la de Bartelson (2013) respecto al papel que puede jugar el reconocimiento en el proceso de resolución del conflicto.

UN CONFLICTO CONGELADO

El estancamiento del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario es una consecuencia de la contradicción que existe entre la legalidad internacional y los intereses geopolíticos de diversos Estados en el sistema internacional. Para Simanowitz, es lamentable el fracaso de la comunidad internacional para abordar la situación y, más aún, el hecho de que durante más de cuatro décadas “el derecho internacional ha sido burlado, mientras que los gobiernos de todo el mundo son complacientes o cómplices de permitir la ocupación e incluso beneficiarse de ella” (2009, p. 299). La cuestión del Sahara Occidental se ha desarrollado alrededor de diversos intereses estatales que han desencadenado en su congelamiento, por ejemplo, en la ONU.

Después de 27 años del cese al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, los saharauis aún no han logrado que su derecho a la libre autodeterminación les sea reconocido (Pinto, 2015), como consecuencia de la suma de diferentes aspectos que transitan entre lo que se considera sustancialmente legal y los intereses de Estados que ocupan un lugar importante en la jerarquía internacional. Para Zoubir (2007), la política de poder y de hechos consumados ha anulado la ilegalidad de la ocupación y la legitimidad de los derechos saharauis. La *realpolitik* a nivel internacional se ve reflejada en la incapacidad de realizar un referendo de autodeterminación, la acción desprestigiada de la ONU y el mandato limitado de la Minurso, todo lo anterior influenciado por los intereses de Estados Unidos y Francia (Darbouche y Zoubir, 2008; Nwafor, 2015; Smith, 2005; White, 2015).

MARRUECOS Y EL REFERENDO DE AUTODETERMINACIÓN

Desde que España anunció su disposición de realizar un referendo de autodeterminación a finales de 1975, en el que participaría la población saharauí identificada en el censo de 1974, Marruecos ha adelantado una serie de maniobras con el objetivo de retrasarlo, torpedearlo e incluso evitarlo a toda costa. Posterior a la Marcha Verde, Marruecos continuó introduciendo cientos de miles de colonos en el territorio del Sahara Occidental con el principal objetivo de alterar los resultados del referendo a su favor (Porges y Leuprecht, 2016). Aunque después del cese al fuego de 1991 el referendo estaba programado para realizarse en 1992, este fue pospuesto repetidamente debido a las estrategias marroquíes para modificar la lista de votantes (Zoubir, 2007).

A partir de 1997, bajo el liderazgo del enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, James Baker, se formularon los planes Baker I y Baker II que buscaban superar los problemas que surgieron en los años anteriores. El primero fue presentado en 2001 y se caracterizó por ser una propuesta de autonomía administrativa a favor de los saharauis, el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio y la realización de un referendo final después de cinco años sin incluir la opción de independencia; este plan fue aceptado por Marruecos y rechazado por el Frente Polisario (White, 2015). El plan Baker II, de 2003, le permitía a los saharauis gobernarse a sí mismos durante un periodo transicional de cinco años, realizar un referendo después de este tiempo con la opción de independizarse y “garantizaba que los colonos marroquíes, que para el año 2000 comenzaban a superar a los saharauis en la

parte ocupada del territorio, pudieran votar” (Pinto, 2015, p. 366). Aunque sorpresivamente el Frente Polisario aceptó la propuesta anterior, Marruecos la rechazó (Smith, 2005).

Si bien Marruecos y el Frente Polisario han intentado entablar negociaciones directas, hasta la fecha estas no han sido exitosas en encontrar una solución aceptable para ambas partes. Es difícil concebir una solución que surja de una negociación entre las partes cuando el Frente Polisario no está dispuesto a negociar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharauí y Marruecos no contempla la posibilidad de realizar un referendo que incluya la posibilidad de independencia para el Sahara Occidental (Penagos, 2007; Simanowitz, 2009). A lo anterior se le debe sumar la falta de compromiso de la comunidad internacional para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes (Pinto, 2015).

EL PAPEL DE LA ONU Y DE MINURSO

La ONU ha reconocido el asunto del Sahara Occidental como un proceso de descolonización incompleto, así como el derecho que tienen los saharauís a la libre autodeterminación e independencia desde hace más de 40 años (Zunes, 2015). Sin embargo, en el CS es donde más evidente ha sido la contradicción entre los intereses geopolíticos de las grandes potencias y la legalidad internacional (Darbouche y Zoubir, 2008; Nwafor, 2015). Si bien el CS ha emitido un número importante de resoluciones relacionadas con este tema, el poder de veto de países como Estados Unidos y Francia ha evitado que se puedan llegar a implementar (Zunes, 2015).

La credibilidad, relevancia y viabilidad de la ONU en el asunto del Sahara Occidental también se han visto afectadas por el papel limitado que ha tenido la Minurso en el conflicto (White, 2015). Por un lado, desde 1991 no ha logrado llevar a cabo el referendo para el que fue creada dado que desde el CS no se ha evidenciado una verdadera intención política de imponerse sobre las tácticas dilatorias implementadas por Marruecos (Nwafor, 2015). Por otro lado, esta es la única misión de la ONU que no tiene el mandato de monitorear la situación de derechos humanos dentro del territorio ocupado (Pinto, 2015; Smith, 2005; Zunes, 2015). De acuerdo con Joffé, el CS “se encuentra impotente para hacer algo más que renovar el mandato de la Minurso cada seis meses” (2010, p. 377), lo que se ve reflejado en la última prórroga de seis meses que se dio en abril de 2018 (Europa Press, 2018) y las discusiones que se dieron dentro del órgano en octubre de este mismo año para volverla a prorrogar (El Diario, 2018).

Simanowitz describe el problema que existe dentro de la ONU y con la Minurso de la siguiente manera:

La ONU fue fundada con el objetivo de prevenir la expansión agresiva del territorio por la fuerza de cualquier nación. Pero en el Sahara Occidental el Consejo de Seguridad ha fallado en tomar acciones efectivas para desafiar la flagrante violación de la Carta de la ONU por parte de Marruecos. Esta es una disputa que entra en su jurisdicción pero la ONU ha escogido pasar resoluciones que no hace cumplir. En vez de imponerle sanciones a Marruecos, los gobiernos alrededor del mundo firman acuerdos de comercio que les permiten explotar los recursos del Sahara Occidental. Mientras tanto, la población saharauí es sujeto de abusos de derechos humanos dentro del territorio ocupado del Sahara Occidental o son dejados para que languidezcan en los campos de refugiados en el desierto. (2009, p. 205)

INTERESES DE TERCEROS

Ahora bien, en gran medida el estancamiento de este conflicto responde a los intereses y las alianzas que grandes potencias como Francia y Estados Unidos tienen con Marruecos, países que le han permitido al último consolidar su control sobre el Sahara Occidental aún cuando no reconocen su soberanía sobre este territorio (Zoubir, 2010). Dentro de la ONU, Francia y Estados Unidos se han encargado de bloquear la obligación que debería tener Marruecos de cumplir con las resoluciones que emite el CS (Zunes, 2015), por lo que su contenido únicamente se queda en el papel y no se hace efectivo. Para Smith (2005), ambas potencias, aunque han apoyado el proceso de organización del referendo, también han promocionado la posición de Marruecos especialmente en el CS.

Francia es el aliado más importante y consistente que ha tenido Marruecos. Desde 1975 los gobiernos franceses han dejado clara su oposición a la creación de un Estado saharauí dado que representa una amenaza para la estabilidad marroquí, un aliado en el que tienen importantes intereses políticos, económicos, militares y culturales (Zoubir, 2010). Además, un nuevo Estado también haría aún más complejas las relaciones entre Francia y Argelia debido a su pasado colonial, y disminuiría la influencia francesa en la región (Zoubir, 2007, 2010). Aunque en la década de los noventa Francia intentó que Argelia redujera su apoyo a la causa saharauí a cambio de mayor ayuda económica, Argelia continúa siendo el mayor aliado del Frente Polisario en el planeta (Darbouche y Zoubir, 2008). Finalmente, Francia también argumenta que un Sahara Occidental independiente podría convertirse en un Estado fallido dependiente

de ayuda externa e, incluso, un territorio de interés para el entrenamiento de grupos terroristas (Darbouche y Zoubir, 2008).

Por otro lado, si bien Estados Unidos en términos generales no se opone al derecho de autodeterminación que tienen los pueblos, en la cuestión del Sahara Occidental su actitud está determinada por consideraciones geopolíticas (Zoubir, 2010). Por medio del apoyo a la monarquía marroquí, en un principio, Estados Unidos buscó contener la posibilidad de que surgiera un Estado prosoviético en la región y, después, Marruecos se convirtió en uno de sus principales aliados en la lucha contra el terrorismo (Zoubir, 2007). Si bien Argelia también ha sido un aliado importante para Estados Unidos en las últimas décadas, este país aún es hostil a algunas ambiciones estadounidenses dentro de la región y, por ende, Marruecos continúa siendo más favorable para los intereses estadounidenses en el Maghreb (Darbouche y Zoubir, 2008; Smith, 2005). Al igual que en el caso de Francia, para Estados Unidos la independencia del Sahara Occidental desestabilizaría la monarquía y crearía un Estado frágil, lo que para este país significa *per se* la posibilidad de que grupos terroristas tomen fuerza en el territorio independiente (Darbouche y Zoubir, 2008).

Además de las consideraciones políticas mencionadas, las grandes potencias también tienen intereses económicos en el territorio de Sahara Occidental debido a su riqueza en recursos (Nwafor, 2015). Aunque el imaginario colectivo relaciona a este territorio como un desierto sin mayor importancia geoestratégica, la realidad es que el Sahara Occidental es rica en recursos como el fosfato y otros minerales, tiene una costa de más de 700 km y sus aguas tienen uno de los bancos pesqueros más grandes del mundo (Zoubir, 2007, 2010). Marruecos ha comercializado los recursos naturales obtenidos en el territorio ocupado bajo acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y economías emergentes como India. Esto, en consecuencia, se ha convertido en una aceptación tácita por parte de estos Estados de la ocupación marroquí al Sahara Occidental (White, 2015).

No obstante, como lo menciona White, “estas prioridades e intereses geopolíticos y económicos, y el deseo de protegerlos consagrado en el Principio de Integridad Territorial, tienden a chocar con un aspecto de la autodeterminación de los territorios no autónomos: la soberanía sobre los recursos naturales” (2015, p. 353). El derecho que tienen los habitantes de estos territorios, como los saharuis, de disponer de los recursos naturales está consagrado en resoluciones de la ONU como la 1514 y la 1803 que confirman que son estas personas quienes tienen la soberanía sobre los recursos y no el país ocupante (Zunes, 2015).

Es importante resaltar que el congelamiento de este conflicto ha tenido consecuencias tanto locales como regionales. Por un lado, desde 1975 más de 125.000 refugiados saharuis han llegado a los campos de refugiados cerca de Tindouf en Argelia, donde enfrentan condiciones difíciles y precarias (Joffé, 2010; Porges y Leuprecht, 2016; Zoubir, 2007). Aunque las condiciones de vida han mejorado debido a la apuesta del Frente Polisario en sectores como la educación, la salud y el acceso a servicios públicos, la situación no dista de ser difícil debido a las duras condiciones climatológicas, la falta de oportunidades laborales y la disminución de la ayuda extranjera (Armstrong, 2018). No obstante, los campos de refugiados en Tindouf, más allá de albergar a miles de refugiados, se han convertido en un símbolo del Estado saharauí y de la capacidad que tiene la RASD de gestionar los asuntos de Estado de manera independiente y autónoma (Nwafor, 2015), incluso desde el exilio.

En los ámbitos regional y subregional, el conflicto saharauí ha impedido la integración del Maghreb y ha congelado, específicamente, el proceso de integración dentro de la Unión del Magreb Árabe (UMA)² (Zoubir, 2007). Además de lo anterior, este conflicto ha alimentado una carrera armamentista entre Marruecos y Argelia que ha desencadenado en una imposibilidad de trabajar conjuntamente (Zunes, 2015). Dichas tensiones también han limitado la capacidad que tienen estos dos países de proyectarse como potencias regionales africanas (Cilliers, Schünemann y Moyer, 2015; Mundy, 2010), han obstaculizado los intercambios comerciales e incluso se han traducido en el cierre de la frontera entre Argelia y Marruecos.

En suma, el conflicto del Sahara Occidental ha permanecido congelado desde la década de los noventa, lo que ha puesto en entredicho la legitimidad de la ONU, la organización intergubernamental más importante a nivel mundial para solucionar conflictos. Asimismo, ha afirmado el poder y la relevancia que tienen los intereses de potencias tradicionales como Estados Unidos y Francia en las dinámicas internacionales. Por un lado, la ONU ha sido incapaz de hacer cumplir las resoluciones emitidas por el CS respecto a este tema y, por el contrario, ha permitido —mediante estrategias como el veto— que Marruecos implemente acciones ilegales y cuestionables para evitar el referendo de autodeterminación. Además, la Minurso no ha logrado su principal objetivo y

2 Fundada el 17 de febrero de 1989 por medio del Tratado de Marrakech, tiene como objetivo coordinar y armonizar las políticas y estrategias en búsqueda de un desarrollo sostenible de todos los sectores. Sus miembros son: Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez (UMA, s. f.).

actualmente se encuentra inmersa en una dinámica de renovación mas no de ampliación (en temas de derechos humanos) de su mandato. Todo lo anterior ha consolidado la *realpolitik* en el sistema internacional. A esto se le suman los intereses geoestratégicos de los países más poderosos que han evitado la consecución de una solución definitiva del conflicto por cuanto sus aspiraciones políticas y económicas en la región se verían afectadas.

EL RECONOCIMIENTO DE LA RASD

Después de la proclamación de la RASD por parte del Frente Polisario el 27 de febrero de 1976, el país ha recibido varias olas tanto de reconocimientos internacionales como de cancelación de este reconocimiento. Para Pinto (2015), aunque el reconocimiento de la RASD por parte de terceros no es un determinante para su existencia como Estado, en el campo de la política internacional es un asunto relevante. El tema del reconocimiento se encuentra inmerso en dos posiciones opuestas: por un lado, actualmente Marruecos invade dos terceras partes del Sahara Occidental, la considera como parte integral de su territorio y afirma tener plenos derechos sobre su administración (Acosta, 2016; Mundy, 2010). Por otro lado, la RASD reivindica su derecho a recuperar el territorio invadido en cuanto cumple con los demás requisitos como Estado y busca obtener reconocimiento como Estado independiente (Acosta, 2016; Pinto, 2015).

De acuerdo con Pinto (2015), la RASD cuenta con todos los requisitos para ser considerado como Estado, según la Convención de Montevideo. Afirma que

... los criterios para dicha existencia legal están bien establecidos: (i) un pueblo cultural y lingüísticamente diferente del de Marruecos; (ii) un territorio definido dentro de límites coloniales prescritos y aceptados universalmente, de los que una quinta parte se encuentra bajo su control; (iii) un gobierno con jurisdicción exclusiva sobre una parte sustancial de la población saharaui en el área liberada del Sahara Occidental y los campos de refugiados en Tinduf; y (iv) la capacidad de entablar relaciones con otros Estados. (2015, p. 370)

Lo anterior es complementado por Simanowitz (2009), quien indica que la RASD ha sido reconocida por otros países como un Estado, mientras que ningún país reconoce la reclamación o soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.

Respecto al reconocimiento de la RASD como Estado se identificaron dos olas principales. La primera se dio posterior a 1976 y durante los años ochenta cuando el respaldo a la RASD era amplio y estuvo ligado a iniciativas en el

seno del Movimiento de Países No Alineados (Vagni, 2014). El primer país en reconocer a la RASD fue Madagascar, un día después de la proclamación de la República (Acosta, 2016), seguido por otros países, en su mayoría africanos (Centro de Estudios do Sahara Occidental da USC, 2018). De hecho, durante esta primera ola la RASD fue admitida como el miembro número 51 de la OUA en 1984, después de que las acciones diplomáticas de Mauritania y Argelia dieran frutos dentro de la organización (Vagni, 2014). Para ese entonces más de 50 países del mundo reconocían la RASD como un Estado par.

Cabe mencionar que la OUA y posterior Unión Africana jugaron un rol muy importante en el reconocimiento como Estado de la RASD. Las organizaciones regionales gestionan los intereses de sus miembros y generan posiciones e intenciones colectivas que, respecto al reconocimiento internacional estatal, reducen los costos diplomáticos (Newman y Visoka, 2018). En el caso de la RASD, su inclusión como miembro de la OUA y posterior participación como Estado fundador de la Unión Africana hizo que Marruecos se retirara de la primera organización en 1984 (Nwafor, 2015) y fuera readmitido en la segunda en la Cumbre del 30 de enero de 2017, 33 años después (Banerjee, 2017).

Ahora bien, la segunda ola se dio entre la década de los noventa, cuando muchos países retiraron su reconocimiento a la RASD, y a partir de 2000 cuando se dieron nuevos reconocimientos (Vagni, 2014). Hoy en día, de acuerdo con el Centro de Estudios do Sahara Occidental da USC (s. f.), más de 80 países alrededor del mundo han reconocido a la RASD, de los que aproximadamente 28 cancelaron el reconocimiento y 8 lo congelaron. Lo anterior llama la atención ya que contraviene lo establecido por la Convención de Montevideo en el artículo 6 que indica que una vez un Estado reconozca a otro, esta acción es incondicional e irrevocable (OEA, 1933). Para el Centro de Estudios do Sahara Occidental da USC (2018) retirar el reconocimiento constituye a una violación de las obligaciones internacionales de los Estados y, por ende, dicha decisión no invalida la existencia del Estado saharauí.

El retiro del reconocimiento a la RASD se ha dado por la influencia que países poderosos –como Francia– tienen sobre Estados con menos poder, y por motivos geopolíticos y geoestratégicos de cada país. Francia ha buscado socavar los éxitos diplomáticos del Estado saharauí por medio de la condicionalidad financiera a otros Estados, especialmente africanos (Darbouche y Zoubir, 2008). Así, ha logrado presionar financieramente a países como Benín, Burkina Faso, Chad, la República del Congo y Togo, quienes aceptaron retirar su reconocimiento diplomático a la RASD entre 1996 y 1997 a cambio de ayuda económica francesa (Zoubir, 2007).

Otra razón por la que aparentemente varios países han decidido retirar o suspender su reconocimiento a la RASD es por conveniencia geopolítica. Países como Granada, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Dominica retiraron su reconocimiento en 2010 después de haberse reunido con altos mandos marroquíes y lo hicieron sin dar explicación alguna (Rioja2, 2010). Esto claramente responde a la campaña que ha impulsado Marruecos en el Sur Global para promover el retiro del reconocimiento a la RASD (Pinto, 2015). Panamá es otro caso que en 2013 decidió suspender las relaciones con la RASD y establecerlas con Marruecos argumentando que “de conformidad con los principios de derecho internacional, la República Árabe Saharaui Democrática no cumplía con los elementos fundamentales para constituir un Estado, y se percató de esto con el ‘transcurrir del tiempo’” (Illueca, 2018, párr. 5). No obstante, dicha decisión fue corregida en 2016 cuando se levantó la suspensión del reconocimiento por parte de Panamá (Centro de Estudios do Sahara Occidental da USC, 2018).

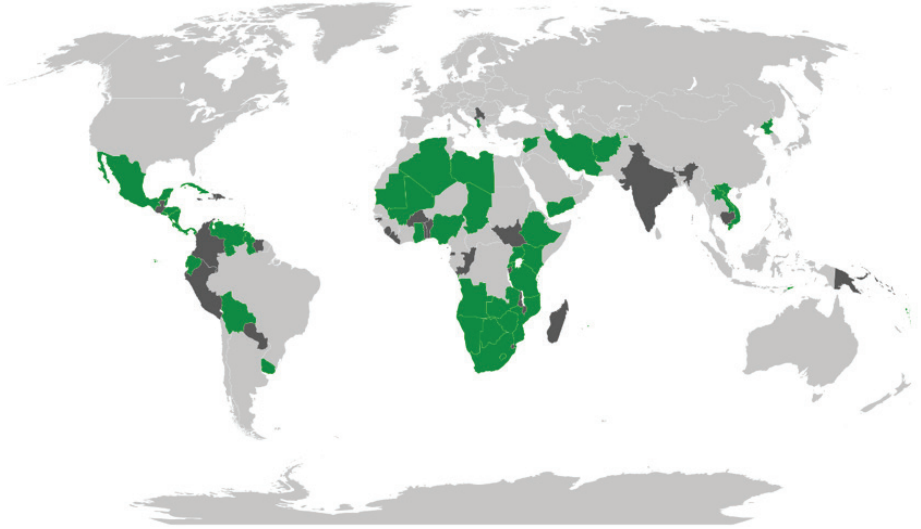
En el caso de Colombia, el Gobierno reconoció a la RASD el 27 de febrero de 1985 y se convirtió en el Estado número 61 en hacerlo (El País, 1985). Sin embargo, en 2001, el gobierno de Andrés Pastrana decidió “congelar” dicho reconocimiento, y aunque el 7 de mayo de 2014 el Senado de la República instó al presidente Juan Manuel Santos a restablecer las relaciones diplomáticas con el Sahara Occidental, hasta la fecha esto no ha ocurrido (Ruiz, 2018). Este congelamiento del reconocimiento es contrario a la legalidad internacional y va en contra de la Convención de Montevideo. Para Ruiz Miguel,

... el hecho de que un Estado de la dimensión del colombiano pueda, incluso en violación de la legalidad internacional, incumplir su propia palabra al “congelar” un reconocimiento previamente hecho transmite una imagen exterior sin duda negativa, y que puede ser esgrimida para cuestionar la fiabilidad de los compromisos exteriores del país. (2018, p. 208)

En el capítulo 9 de este libro, “Palestina e Israel en la política exterior colombiana”, se hace referencia a un asunto similar teniendo en cuenta que entre 1947 y 1969 Colombia defendió los derechos palestinos y, posteriormente, su política se tornó ambigua y contradictoria.

En el mapa de la figura 1 se presentan, en verde, los países que actualmente tienen relaciones diplomáticas con la RASD, en gris oscuro los que han decidido cancelarlas o congelarlas, y en gris claro aquellos que no han reconocido este Estado.

FIGURA 1. RECONOCIMIENTO DE LA RASD



Fuente: elaboración propia con base en información del Centro de Estudios do Sahara Occidental da USC (2018).

Las dinámicas de reconocimiento a la RASD, en especial las relacionadas con el no reconocimiento o el retiro o suspensión del mismo, han estado relacionadas con la incapacidad de la comunidad internacional de actuar según las normas internacionales y, por el contrario, hacerlo a partir de los intereses de los más poderosos y de consideraciones políticas (Mundy, 2010; Newman y Visoka, 2018; Pinto, 2015). Para Pinto (2015), la principal razón por la que no existe un consenso respecto al reconocimiento como Estado de la RASD es el interés que tienen las potencias de mantener el *statu quo*. Según académicos como Nwafor (2015), Simanowitz (2009) y Zunes (2015), el CS ha fallado en ejecutar acciones efectivas para contrarrestar las violaciones de Marruecos a la Carta de las Naciones Unidas, dado que por medio del veto de países como Estados Unidos y Francia no se ha permitido que las resoluciones se cumplan. Con el fin de superar la limitante anterior, Pinto (2015) propone que la Asamblea General sea la que tome el liderazgo del tema invocando la Resolución 377 de 1950, también conocida como Unión pro paz. Este documento faculta a la Asamblea General a tomar medidas si el CS no lo hace debido a la falta de unanimidad de los miembros permanentes y en casos que amenacen la paz y la estabilidad internacional (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1950).

El reconocimiento de la RASD a nivel internacional puede ser concebido como una opción para desestancar el conflicto y buscar una solución definitiva

en cuanto garantizaría que se cumpliera lo establecido por la ONU en la Resolución 1514, y sería coherente con el no reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la soberanía que argumenta Marruecos sobre el Sahara Occidental. Tomando como base la Convención de Montevideo, la RASD cumple con las características que definen a un Estado aun cuando la mayoría de su territorio esté actualmente invadido por un tercero. Para Smith (2005), la RASD no es más que un “Estado en espera” que tiene todas las estructuras institucionales y de legitimidad necesarias para transferir al territorio del Sahara Occidental. A diferencia de otros conflictos, en el caso del Sahara Occidental una fórmula que satisfaga los intereses de ambas partes es prácticamente imposible de lograr teniendo en cuenta que

... este no es un asunto de “dividir la diferencia”, dado que una parte está bajo una ocupación extranjera ilegal y la otra parte es el ocupante [...] Insistir en que el pueblo del Sahara Occidental debe renunciar a su derecho moral y legal a una auténtica autodeterminación no es, por lo tanto, una receta para la resolución de conflictos, sino para conflictos mucho más graves en el futuro. (Zunes, 2015, p. 297)

Mediante la promoción del reconocimiento de la RASD se puede trascender de una realidad en la que el derecho a la conquista deje de ser reforzado por la comunidad internacional, a una en la que prevalecería el respeto por las normas internacionales y la independencia de la última colonia africana. Para Zunes (2015), decidir cuál de los dos principios va a prevalecer determinará no solo el futuro del Sahara Occidental sino también el de todo el orden internacional.

CONCLUSIONES

La cuestión del Sahara Occidental es, sin duda, uno de los conflictos contemporáneos que mejor ejemplifica la problemática que existe entre el derecho internacional y las decisiones que se toman a partir de cálculos e intereses geoestratégicos. Aunque la normatividad internacional es clara respecto a los elementos que constituyen un Estado y el derecho que tienen los pueblos para alcanzar su autodeterminación, en la actualidad continúan existiendo controversias que no pueden ser solucionadas debido a la selectividad que han desarrollado los Estados sobre si cumplir o no lo que establecen las normas. Este es el caso del Sahara Occidental, un conflicto estancado por más de 40 años, cuya solución no se ha alcanzado debido a la falta de compromiso de la comunidad internacional.

La legitimidad y validez de la causa saharauí han sido reconocidas en el ámbito internacional en instancias tan importantes como la ONU y la CIJ. En estos escenarios, no solo se ha reivindicado el derecho a la libre autodeterminación por medio de resoluciones y fallos, sino también se ha reconocido que no existe ningún vínculo de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos. No obstante, aunque ningún país reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental, varios —como Francia y Estados Unidos— le han permitido al Estado marroquí consolidar su control en el territorio ocupado ilegalmente.

Aunque desde 1991 se ha buscado una solución pacífica al conflicto, especialmente por medio de la realización de un referendo, no se ha logrado debido a razones que también ejemplifican la problemática que existe entre legalidad internacional y los intereses de los miembros de la comunidad internacional. La ONU ha perdido credibilidad respecto a su rol dentro de la resolución de conflictos dado que, por medio del veto, los intereses de los miembros permanentes siguen estando por encima de los derechos que esta misma organización ha reivindicado desde 1960. Esto también se ve reflejado en el hecho de que la Minurso es la única misión de esta organización que no tiene la capacidad de monitorear la situación de derechos humanos en el Sahara Occidental, en cuanto dentro del CS no se ha logrado un consenso de los miembros permanentes.

Todo lo anterior no es más que el resultado de la primacía que han tenido los intereses de países como Estados Unidos y Francia en la búsqueda de una solución al conflicto. La incapacidad del CS de hacer efectivas sus resoluciones, así como el apoyo que tiene Marruecos de potencias poderosas, ha desencadenado que, hasta el momento, no se haya encontrado una solución definitiva. Aunque se han planteado soluciones en las que se intenta satisfacer intereses tanto de Marruecos como del Frente Polisario, estas resultan conflictivas teniendo en cuenta que el derecho a la autodeterminación del Sahara Occidental es reconocido, que la RASD cuenta con los elementos para consolidarse como un Estado según la Convención de Montevideo y que las pretensiones de Marruecos no son reconocidas por ningún Estado.

El reconocimiento de la RASD está sustentado en el derecho internacional tanto en la doctrina como en la costumbre internacional. La Convención de Montevideo, el fallo de 1975 de la CIJ y las resoluciones de la ONU respecto a este tema confirman el derecho que tiene la población saharauí de tener su propio Estado, así como el deber de la comunidad internacional de reconocerlo y aceptarlo como un par dentro del sistema. Sin embargo, las prácticas de cancelación o suspensión de reconocimiento de la RASD demuestran la necesidad

que existe de fortalecer y promover el respeto por las normas internacionales que muchas veces son obviadas argumentando intereses y cálculos que van en contra de la práctica internacional.

Actualmente, el sistema internacional se debate entre el respeto a las normas de derecho internacional, su modificación o actuar según las consideraciones de los Estados más poderosos. La resolución del conflicto del Sahara Occidental, y el papel que juegue el resto de Estados, podría ayudar a superar la contradicción que hoy en día existe entre legalidad internacional y los cálculos geopolíticos de los países. El reconocimiento de la RASD como Estado definirá un hito en las relaciones internacionales respecto a la promoción de un orden internacional que respete y fomente las normas que han reconocido todos los Estados por encima de derechos como el de la conquista, que ya no son aceptados.

Las consideraciones geopolíticas de las grandes potencias, que han llevado al congelamiento de este conflicto, podrían contenerse en espacios de negociación internacional por medio de prácticas no confrontacionales. La amortiguación (*buffering*), la provocación (*baiting*) y la vinculación (*binding*) son estrategias de política exterior que pueden ser implementadas por diferentes países con el objetivo de atenuar el peso de las potencias, neutralizar su poder e influir en sus actuaciones de política exterior. En el marco de la ONU, este tipo de estrategias podría resultar en la aplicación de la Resolución 377, que permitiría a países y potencias de diferente orden en la jerarquía internacional jugar un papel más relevante en el proceso de reconocimiento del Estado saharauí.

REFERENCIAS

- ACOSTA CASTRO, A. (2016). *Del Sahara Occidental a la RASD: hacia la construcción de un Estado Árabe y Democrático. El papel de la ONU en este conflicto*. Montevideo: Universidad Católica de Uruguay.
- AGNÉ, H. (2013). The politics of international recognition: symposium Introduction. *International Theory*, 5(1), 94-107. <https://doi.org/10.1017/S1752971913000018>
- ARMSTRONG, H. (2018). *Savía nueva en los campos de refugiados saharauis*. Recuperado de <https://www.politicaexterior.com/actualidad/savia-nueva-en-los-campos-refugiados-saharauis/>
- Asamblea General de las Naciones Unidas (1950). *Resolution 377 (V) "Uniting for Peace"*. Recuperado de [http://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A\(v\).pdf](http://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf)

- BANERJEE, A. (2017). Moroccan entry to the African Union and the revival of the Western Sahara dispute. *Al Jazeera*, 59, 33-37.
- BARTELSON, J. (2013). Three concepts of Recognition. *International Theory*, 5(1), 107-129. <https://doi.org/10.1017/S175297191300002X>
- CASTELLINO, J. (2000). *International Law and Self-determination*. La Haya: Martinus Nijhoff Publishers.
- Centro de Estudos do Sahara Occidental da USC. (2018). *Reconocimientos de la RASD*. Recuperado de http://www.usc.es/es/institutos/ceso/RASD_Reconocimientos.html
- CILLIERS, J., SCHÜNEMANN, J. y MOYER, J. D. (2015). Power and influence in Africa: Algeria, Egypt, Ethiopia, Nigeria and South Africa. *African Futures* (March).
- Corte Internacional de Justicia (1975). Caso relativo al Sahara Occidental. Opinión consultiva de 16 de octubre de 1975. Recuperado de <http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/06/fallo-sahara.pdf>
- DARBOUCHE, H. y ZOUBIR, Y. H. (2008). Conflicting international policies and the Western Sahara stalemate. *The International Spectator*, 43(1), 91-105.
- DASGUPTA, P. (2000). De recognition of Western Sahara: Foreign Policy volte-face. *Economic and Political Weekly*, 35(33), 2914-2917.
- El Diario (2018). EE.UU. apuesta por prorrogar la Minurso por seis meses, Francia prefiere un año. Recuperado de https://www.eldiario.es/politica/EEUU-prorrogar-Minurso-Francia-prefiere_o_824167580.html
- El País (1985). *Colombia reconoce a la RASD*. Recuperado de https://elpais.com/diario/1985/02/28/internacional/478393202_850215.html
- Europa Press (2018). *El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga seis meses más el mandato de la Minurso en el Sáhara Occidental*. Recuperado de <https://www.europapress.es/internacional/noticia-consejo-seguridad-onu-prorroga-seis-meses-mas-mandato-minurso-sahara-occidental-20180428132805.html>
- FABRY, M. (2012). The contemporary practice of state recognition: Kosovo, South Ossetia, Abkhazia, and their aftermath. *Nationalities Papers*, 40(5), 661-676.
- GEIS, A., FEHL, C., DAASE, C. y KOLLIARAKIS, G. (2015). Gradual processes, ambiguous consequences: Rethinking recognition in international Relations. En A. GEIS, C.

- FEHL, C. DAASE y G. KOLLIARAKIS (eds.). *International Relations*. London: Palgrave Macmillan.
- GONZÁLEZ OLVERA, P. (1992). El reconocimiento de los Estados en la actualidad. *Revista Mexicana de Política Exterior*, (34). Recuperado de <https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n34/gonzalezo.pdf>
- HERNÁNDEZ DÍAZ, L. (2011). *Análisis de las implicaciones políticas para Marruecos frente al reconocimiento del Sahara Occidental como Estado por parte de la Unión Africana, 2002-2008*. <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.569130>
- ILLUECA, A. (2018). *El (des)reconocimiento de un Estado*. Recuperado de https://www.prensa.com/opinion/desreconocimiento_o_5088991135.html
- JOFFÉ, G. (2010). Sovereignty and the Western Sahara. *Journal of North African Studies*, 15(3), 375-384. <https://doi.org/10.1080/13629387.2010.520237>
- MEDINA, B. (2017). Autodeterminación de los pueblos indígenas: sus propias normas y sistemas políticos. Recuperado de <https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2472/derecho-a-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-indigenas>
- MUNDY, J. (2010). Algeria and the Western Sahara Dispute. *The Maghreb Center Journal*, (1), 1-14.
- NESIAH, V. (2003). Placing international law: White spaces on a map. *Leiden Journal of International Law*, 16, 1-35. <https://doi.org/10.1017/S0922156503001006>
- NEWMAN, E. y VISOKA, G. (2018). The European Union's practice of state recognition: Between norms and interests. *Review of International Studies*, 1-27.
- NWAFOR, E. (2015). Africa or Morocco? A historical perspective on the resolution of the contrived stalemate over the Western Sahara decolonization process. *Journal of Middle Eastern and Islamic studies*, 9(2), 98-120.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1960). *Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales*. Recuperado de <http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1975). General assembly - Thirtieth Session.
- Organización de los Estados Americanos (OEA) (1933). *Convención de Montevideo*. Recuperado de <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html>

- PENAGOS CHAVARRIO, L. (2007). Sahara Occidental: entre la invisibilidad y el reconocimiento internacional. En M. WABGOU (ed.). *Sistemas políticos africanos: debates contemporáneos en Colombia desde la Ciencia Política*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- PINTO, P. (2015). Independence by fiat: A way out of the impasse – the self-determination of Western Sahara, with lessons from Timor-Leste. *Global Change, Peace and Security*, 27(3), 361-376.
- PORGES, M. y LEUPRECHT, C. (2016). The puzzle of nonviolence in Western Sahara. *Democracy and Security*, 12(2), 65-84.
- RIOJA2 (2010). Cuatro países caribeños retiran su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática. Recuperado de https://www.rioja2.com/n-68257-501-Cuatro_paises_caribenos_retiran_reconocimientoRepublica_Arabe_Saharaui_Democratica/
- ROJAS AMANDI, V. M. (2010). El reconocimiento internacional. En *Derecho Internacional Público* (pp. 61-65). México D.F: Universidad Autónoma de México.
- RUIZ MIGUEL, C. (2018). ¿Qué contribución puede hacer Colombia a la paz y al respeto del derecho internacional en el Sahara Occidental. *OASIS*, (27), 191-210.
- SHAW, M. N. (2003). *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SIMANOWITZ, S. (2009). “Not one grain of sand”: International law and the conflict in Western Sahara. *Contemporary Review*, 291(1694).
- SMITH, L. E. (2005). The struggle for Western Sahara: What future for Africa’s last colony? *The Journal of North African Studies*, 10(3-4), 545-563.
- TUDOROIU, T. (2017). Taiwan in the Caribbean: A case study in state de-recognition. *Asian Journal of Political Science*, 25(2), 194-211.
- UMA (s. f.). L’union du Maghreb Arabe. Recuperado de <http://www.maghrebarabe.org/en/uma.cfm>
- VAGNI, J. J. (2014). Contrapuntos diplomáticos magrebíes en América Latina: Marruecos, Argelia y la RASD en la cuestión del Sáhara Occidental. *Foro Internacional*, 54(3), 661-695.
- WHITE, N. (2015). Conflict Stalemate in Morocco and Western Sahara: Natural Resources, Legitimacy and Political Recognition. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 42(3), 339-357.

WORSTER, W. (2009). Law, politics, and the conception of the state in state recognition theory. *Boston University International Law Journal*, 27(1), 115-171.

_____. (2010). *Sovereignty: two Competing Theories of State Recognition*. Recuperado de http://www.exploringgeopolitics.org/publication_worster_william_sovereignty_constitutive_declaratory_statehood_recognition_legal_view_international_law_court_justice_montevideo_genocide_convention/

ZOUBIR, Y. H. (2007). Stalemate in Western Sahara: Ending international legality. *Middle East Policy*, 14(4), 158-177.

_____. (2010). The unresolved Western Sahara conflict and its repercussions. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 4(2), 85-99.

ZUNES, S. (2015). Western Sahara, resources, and international accountability. *Global Change, Peace and Security*, 27(3), 285-299.